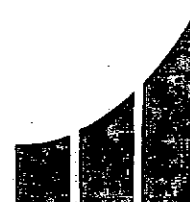


FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO



**INSEGURIDAD EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ:
EVOLUCION RECIENTE Y PERSPECTIVAS DE POLITICA**

**Camilo Granada
FEDESARROLLO**

Santafé de Bogotá, Septiembre 1997

INSEGURIDAD EN SANTAFE DE BOGOTA :

EVOLUCION RECIENTE Y PERSPECTIVAS DE POLITICA

Camilo Granada. Fedesarrollo

I. INTRODUCCION

En el presente trabajo se busca hacer una revisión de las tendencias recientes de la evolución de la criminalidad en la capital de la República y fomentar el debate sobre las soluciones que puedan aportar las autoridades y la sociedad en general para disminuir las manifestaciones de violencia y delincuencia de Bogotá. Esta presentación se articula en cinco secciones, además de esta introducción. Tendencias de la criminalidad en Bogotá (II), criminalidad por zonas (III), percepción de la ciudadanía (IV), las instituciones y las políticas seguidas para combatir el crimen (V) y por último, a modo de conclusión, algunas propuestas para una política de seguridad en la ciudad (VI).

II. TENDENCIAS Y EVOLUCION RECIENTE DE LA CRIMINALIDAD EN BOGOTA

Según las estadísticas de la Policía Nacional para 1996, en Bogotá se cometió el 31.2% del total de crímenes y delitos reportados, aun cuando sólo agrupa al 14.8% de la población total del país.

El total de delitos en la Capital de la República ha venido creciendo desde 1994. Así, ese año se cometieron 63.285 delitos mientras que en 1995 esta cifra fue de 67.533, o sea un incremento del 6.71%. Para 1996, fue de 72.152 (más 6.84%). Sin embargo,

tomando en consideración la población bogotana, se constata una disminución de la tasa de delitos por 100.000 habitantes, la cual pasó de 1.289 en 1995 a 1.232 en 1996.

Para Bogotá, los delitos contra el patrimonio económico han representado el 68.1% del total en 1995 y el 72.4% en 1996. Le siguen aquellos contra la vida y la integridad personal con 19.9% y 18.8% respectivamente (ver Cuadro 1 y Gráfico 1). Es notoria la creciente concentración de la delincuencia en estos dos tipos de ofensas, pues representaron el 80 y el 90% del total para cada año.

Dentro de la categoría de delitos contra el patrimonio económico se destaca el incremento constante a lo largo del período en el número de vehículos hurtados el cual pasó de 3,722 en 1990 a 8,530 en 1996. En cuanto al hurto en residencias, este tuvo un crecimiento acelerado entre 1990 y 1993 (de 2,565 a 9,037), para disminuir desde entonces de manera progresiva hasta 1996 (4,983 casos) (ver Cuadro 2 y Gráfico 2). El hurto a entidades financieras ha presentado grandes oscilaciones. Primero, una disminución en 1991 y 1992, para luego crecer abruptamente en 1993 (más 463% con relación al año anterior). Desde 1994 esta cifra a venido reduciéndose para situarse en 358 para 1996 (ver Cuadro 2 y Gráfico 3). Por último, el número de atracos a personas presenta un problema en las estadísticas registradas por la Policía Nacional, ya que de 814 en 1993, pasó a 11,109 en 1994. Las autoridades señalan que esto se debe a unas mayores facilidades para colocar los denuncios correspondientes, y que por lo tanto más que un crecimiento de la criminalidad real, se trata de un mejoramiento de la capacidad de registro. Debido a esto no puede determinarse cual ha sido el comportamiento real de este tipo de delito.

En materia de delitos contra la vida y la integridad personal, el homicidio ocupa, por su número y por su gravedad, un lugar prioritario. Como se puede apreciar en el Cuadro 3 y el Gráfico 4, los homicidios comunes en Bogotá, sin incluir los accidentes de tránsito, pasaron de 2,250 en 1990 a 4,352 en 1993. A partir de 1994 esta estadística ha venido

disminuyendo, y en 1996 se registraron 3,531 casos. Se analizan las tasas por 100,000 habitantes, la evolución es similar, situándose ésta para 1996, por debajo de la de 1992. En su mayoría estas muertes fueron provocadas con arma de fuego. En 1996, 7 de cada 10 homicidios fueron cometidos con este tipo de armas. El análisis de estas cifras permite establecer que 1995 hubo 10 homicidios diarios, mientras que para 1996 disminuyó ligeramente a 9.7.

De acuerdo con los reportes de Medicina Legal entre 1995 y 1996 se presentaron en Bogotá 6,557 casos de maltrato al menor y 3,071 casos sexológicos relacionados con violación y otros delitos contra la libertad y el pudor sexual. El maltrato y el abuso sexual se concentró en el grupo de 5 a 14 años. Los causantes del maltrato en su gran mayoría fue el padre y en segundo lugar la madre (ver Gráfico 5). El padre es el responsable del mayor número de casos de agresión sexual, seguido por otro familiar. En definitiva, del total de este tipo de delitos, más del 80% fueron cometidos por personas conocidas de la víctima (Gráfico 6).

Las estadísticas más recientes son las de la Policía Metropolitana para el primer semestre de 1997 (ver Gráfico 7). En éstas se destaca que el homicidio ha seguido disminuyendo, al pasar de 1,581 casos en el primer semestre de 1996 a 1,366 en el mismo período de este año (-13.6%). De estos, 1,059 fueron cometidos con armas de fuego (77.5%), y 248 con armas blancas (18.1%). Cuando se miran las causas del homicidio, la Policía reporta que 37.4% fueron producto de una venganza, 32% se originaron en una riña y 26.6% durante un atraco. La mayor concentración de hechos se dio durante el fin de semana (sábado y domingo) con 44.7% del total.

En cuanto al hurto de vehículos (sin incluir motos), la tendencia sigue siendo al alza, con 3,123 casos en el primer semestre de este año, contra 2,811 durante los seis primeros meses de 1996 (+11.1%). La mayoría de los carros hurtados fue "halada" o sea mientras el automóvil estaba parqueado (55.7%). El número de hurtos con

violencia (atracos) fue la segunda modalidad más utilizada por los delincuentes (40%). Es preocupante constatar que esta forma de robo creció un 32.3% frente a 1996.

Los atracos bancarios tuvieron un crecimiento pronunciado en este año (56.1%). Este delito, que había disminuido en 1996, generó pérdidas al sector financiero por 4,300 millones de pesos en este semestre.

El atraco a las residencias también aumentó ligeramente (5.3%). De los 573 atracos que se produjeron en el primer semestre de 1997, el 70% se realizó durante el día y en el 72% de los casos se utilizaron armas de fuego. Los robos a las casas, en ausencia de sus ocupantes, son mucho más numerosos (3,172) y crecieron igualmente un 17.6%.

El atraco a personas en la vía pública mostró una tendencia al crecimiento durante el primer semestre de 1997. En efecto, de 5,117 casos reportados a las autoridades en 1996, pasó 5,701 en este año (+11.4%). Las armas de fuego fueron utilizadas en el 64% de los hechos, mientras que las armas cortopunzantes se usaron en el 24%.

III. LA CRIMINALIDAD EN SANTAFE DE BOGOTA POR ZONAS

Para estudiar la situación de criminalidad y violencia en la capital es necesario ir más al detalle de las estadísticas para observar las localidades donde se concentran los hechos delictivos. Esta información georeferenciada sirve para entender la dinámica propia de cada uno de los principales tipos de delito e igualmente debe servir para orientar la labor de las autoridades en materia de prevención, disuasión y vigilancia.

La capital del país está dividida en 20 alcaldías locales¹, una de las cuales, Sumapaz, es principalmente rural. Cuando se observan el número de actos delictivos cometidos por zonas, se destacan dos hechos principales : Por un lado, que existen grandes disparidades entre localidades, siendo Kennedy, Suba, Santafé y Engativá las más afectadas por el fenómeno de la criminalidad. Por otro, para cada uno de los delitos, cinco de las veinte localidades explican alrededor del 50% de los hechos denunciados. (ver Gráfico 8).

En materia de homicidios, por ejemplo, durante el primer semestre del año, de manera consistente (1995, 96 y 97) las localidades de Santafé (14%), Ciudad Bolívar (13.1%), Kennedy (12.8%), Rafael Uribe (13.4%) y San Cristóbal (6.6%) concentran el 60% del total de muertes violentas de la capital. Todas estas localidades se ubican en el centro y sur de la ciudad. En cuanto Santafé, la más violenta de todas, alberga múltiples zonas de las llamadas "ollas" de delincuencia, prostitución y expendio de drogas. Las anteriores localidades, más Engativá, representan el 52.5% del total de lesiones personales con incapacidad superior a los 30 días reportadas a las autoridades.

En cuanto al hurto de vehículos, las localidades más afectadas son Engativá (12.4%), Kennedy (12%), Usaquén (10.4%), Chapinero (9.4%), Teusaquillo (9.4%) y Suba (9.3%) las cuales totalizan 62.9% de los automóviles robados en Bogotá.

El atraco bancario se localizó principalmente en Chapinero (15.8%), Usaquén (11.2%), Puente Aranda (11.2%), Kennedy (8.6%) y Suba (8.2%) con el 55% del total de estos delitos. Esto, como era de esperarse, coincide con el mapa de ubicación de entidades bancarias.

¹Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

Las localidades que más registraron atracos a residencias fueron Suba (12.2%), Kennedy (11.9%), Ciudad Bolívar (8%), San Cristóbal (7%) y Rafael Uribe (6.5%), para un 45.6% del total. Aun cuando en la localidad de Suba coexisten viviendas pertenecientes a casi todos los estratos, este tipo de delito se concentra, contrario a lo que se podría imaginar, en los sectores de estrato 1, 2, 3 y 4 de la ciudad. Lo anterior está relacionado probablemente con la capacidad de los estratos superiores para pagar esquemas de protección y vigilancia privadas.

Los atracos callejeros, el fenómeno delictivo que afecta a más ciudadanos, se concentra en Kennedy (12.7%), Santafé (10.8%), Suba (7.5%), Chapinero (7.4%) y Engativá (7.3%), las cuales, sumadas, alcanzan el 45.7% del total de atracos en Bogotá. Estas agresiones se concentran en el norte y centro de la ciudad.

En conclusión de este breve diagnóstico, pueden señalarse cuatro elementos sobresalientes. Primero, Bogotá aun cuando es la ciudad con el número de hechos delictivos más alto del país, no es la ciudad más violenta del país, cuando se pondera por la población (tasas por 100,000 habitantes). Segundo, el homicidio, siendo el crimen más grave, ha venido disminuyendo en la capital del país de manera consistente desde 1994. Sin embargo, los niveles actuales siguen siendo excesivamente elevados y superan ampliamente los de otras ciudades del mundo, aún aquellas reputadas como particularmente violentas (Sao Paulo, México, Nueva York o Los Angeles). Tercero, el conjunto de la criminalidad, homicidios excluidos, ha venido creciendo de manera sistemática en Bogotá. No es pues de extrañar que los delincuencia sea considerada como el principal problema de la ciudad en todas las encuestas realizadas. Cuarto, a pesar de este panorama sombrío, el problema de la delincuencia es mucho más localizado de lo que parece. No puede por lo tanto generalizarse la amenaza. Esto es particularmente relevante ya que debe servir de base para el diseño de estrategias contra el crimen y de focalización de los esfuerzos de las autoridades. El caso específico de Kennedy o Suba, merecen particular

atención, pues son esas localidades las que enfrentan las peores condiciones de seguridad y tranquilidad.

Las cifras presentadas hasta ahora recogen la información disponible por las autoridades, fruto del denuncia por parte de las víctimas. En todos los países del mundo se presenta un fenómeno de subregistro que es mayor o menor, en función tanto de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, como del tipo de delito. Esa diferencia entre la criminalidad real (vivida por las personas) y la denunciada se conoce como la cifra oculta de criminalidad. Así, por ejemplo los homicidios, los robos de vehículos o los atracos bancarios tienen una tasas de subregistro bajas (debido a la acción de la Policía y por la necesidad de formular la queja para recibir la indemnización del seguro), mientras que el secuestro, los hurtos menores, algunas formas de lesiones personales y los delitos sexuales son denunciados en menor proporción.

IV. LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE LA DELINCUENCIA

Para tratar de aproximarse a la criminalidad real en Colombia, el DANE, dentro de la encuesta nacional de hogares, periódicamente incluye un modulo dedicado a la violencia y la criminalidad, el cual intenta medir el número de delitos cometidos en el año anterior a la encuesta, independientemente de que hayan sido denunciados o no, así como la percepción de la población frente a los hechos violentos y su actitud frente a los mismos. Durante la década de los noventa, este módulo se ha realizado en junio de 1991 (9 ciudades y sus áreas metropolitanas) y en diciembre de 1995 (11 ciudades y sus áreas metropolitanas). Un resumen de los resultados de estas encuestas se encuentra en los Cuadros 4 y 5.

En la encuesta de 1991, Bogotá representó el 40.4% del total de delitos declarados por los encuestados. Para 1995, esta cifra aumentó al 42.5%. Es de anotar que mientras en 1991 se reportaron en las nueve ciudades 355,166 delitos, en 1995 fueron 547,442 o sea un incremento de 54.1% entre las dos encuestas.

En ambas encuestas la delincuencia demostró ser una de las principales razones de preocupación de los bogotanos sobre la calidad de vida de sus barrios, independientemente de que hubieran sido víctimas directas de un delito. El 22.5 % de los hogares consideró a la delincuencia como el principal problema urbano que los afectó en 1991. Para 1995 este porcentaje no se modificó (22.7%). La presencia de pandillas en los barrios pasó de ser el tercer problema reportado en la encuesta en 1991 (13.8%) a ser el segundo en importancia en 1995 (19.2%). Así mismo delitos que tenían una participación menor en 1991 como el expendio y consumo de drogas (8.0%), conflictos entre vecinos (3.9%), los accidentes de tránsito (2.3%) y el maltrato en los hogares (0.6%) pasaron a ser considerados como hechos importantes en 1995: El expendio y consumo de drogas (12.7%), conflictos entre vecinos (4.8%), accidentes de tránsito (7.5%) y maltrato en los hogares (3.5%).

Frente a los problemas de su comunidad, el 28% en 1991 y el 35% en 1995, declararon haber acudido o colaborado con las autoridades, lo cual refleja un mejoramiento de la calidad de las relaciones, en particular con la Policía. Sin embargo, hubo una reducción del número de personas que respondió con "organizar el vecindario", de 12.3% en 1991 a 10.4% en 1995. De igual forma el número de personas que aceptó haber cambiado de residencia por la violencia aumento de 0.4% en 1991 a 2.4% en 1995. Estos dos elementos, subrayan el creciente aislamiento de los ciudadanos y la percepción de impotencia frente al deterioro de la calidad de vida en sus barrios de residencia.

A los encuestados se les preguntó igualmente a quién acudirían en caso de verse afectados por hechos violentos. Las respuestas revelaron una preponderancia marcada por las autoridades de policía. En 1991, los CAI concentraron el 56.7% de las respuestas, seguidos por las inspecciones de policía con un 26.8%. Para 1995, los CAI continuaron siendo la autoridad más confiable para el 40.3% de los encuestados, seguido por las unidades de policía (30.5%) y las inspecciones cayeron a sólo el 12.4%.

En cuanto a las tasas de victimización, del total de hogares en Santafé de Bogotá en 1991 el 11% se vio afectado directamente por algún tipo de delito. Para 1995 esta cifra pasó a un 16%. En 1991 se reportaron 143,580 delitos, mientras que en 1995 la cifra fue de 240,447 presentándose un crecimiento del 67.4%. La gran mayoría de las agresiones fueron contra el patrimonio económico (81.4% del total en 1991 y 93.4% en 1995), seguidas por aquellas contra la vida e integridad personal (7.2% y 3.6%, respectivamente). En términos absolutos, las primeras pasaron de 116,900 a 224,481 (un aumento del 92%), mientras las segundas disminuyeron de 10,334 a 8,635 (una disminución del 15.44%).

Dentro de las principales medidas tomadas por los ciudadanos frente a la comisión de un delito, un 30.1% en 1991 y un 30.3% en 1995 decidió acudir a las autoridades y colaborar con la policía para denunciar un delito. Las personas que declararon responder al delito por su propia cuenta disminuyeron del 7.5% al 6.2% de los encuestados, elemento positivo pues deja pensar que el recurso a la venganza o a la justicia por mano propia ha perdido vigencia entre las alternativas a disposición de un ciudadano agredido.

La encuesta también permitió conocer las preferencias de los individuos sobre la decisión de denunciar o no el hecho ante las autoridades. En 1991, la primera entidad receptora de las denuncias ciudadanas fue la inspección de policía, con el 29.2% de

las denuncias, seguida de los CAI (24.9%), la unidad de policía (22.6%) y los juzgados (10%). En 1995, esta tabla de preferencias cambió. El primer lugar lo obtuvieron las unidades de policía, (37.4%), las inspecciones de policía (26.1%), los CAI (10.2%), y las unidades de fiscalía y los juzgados (10.5%).

La razón por la cual los individuos no denunciaron los delitos se debió principalmente a la falta de pruebas (31.1% en 1991 y 35.8% en 1995). El temor a las represalias también fue un impedimento importante para acudir a las autoridades, aunque vale la pena resaltar que este temor ha venido disminuyendo entre estos dos años (13.3% en 1991 y 6.7% en 1995). Se observa, también, que la percepción de los individuos sobre la inoperancia de la justicia se incrementó. En 1991 el 12.8% de los hogares encuestados adujo ésta como razón de no denuncia, mientras que en 1995 este porcentaje ascendió al 27.7%. La mención de "trámites complicados", aumentó de 7.8% a 9.9% entre las dos encuestas. Si se adicionan estos dos últimos ítems, se encuentra que la falta de conocimiento y de credibilidad de las instituciones pasó a ser la principal causa de no denuncia.

Como puede observarse de las encuestas realizadas por el DANE, la seguridad y la tranquilidad en los sitios de residencia constituyen una de las principales preocupaciones de los habitantes de Bogotá. La predominancia marcada de los delitos contra la propiedad marcan un camino para las respuestas institucionales en materia de seguridad. Si bien es claro que el homicidio debe continuar siendo una prioridad, es necesario que respuestas más eficaces se desarrollen frente a lo que los ciudadanos perciben como el riesgo real más importante e inmediato : los atracos callejeros, el asalto a residencias, y el hurto de vehículos. Es importante destacar igualmente que la degradación de los barrios ha afectado la calidad de vida de los bogotanos, aún cuando no los afecte directamente. La presencia de pandillas, de expendios de drogas o de centros de lenocinio, constituyen una amenaza latente para un número creciente de hogares. Por último, un elemento positivo hacia la disminución de los índices de

violencia lo constituye el incremento de la apreciación negativa que sobre la violencia intrafamiliar tienen los bogotanos. Este tipo de hechos son particularmente graves por dos razones. Primero, por la situación de indefensión y de inferioridad en la que se encuentran las víctimas (niños, mujeres) frente a un agresor que cohabita bajo el mismo techo. Segundo, porque, como lo demuestran los estudios realizados en otros países, la violencia en el hogar es un generador de violencia en la calle. Las personas que han tenido que soportar o ser testigos de tratos crueles reiterados durante su infancia tienen una mayor probabilidad de convertirse, llegados a la adolescencia o la edad adulta, en agresores ellos mismos.

El estado, y en particular la administración distrital, tienen elementos alentadores en los cambios de percepción y de actitud de los ciudadanos. La mayor disposición para acudir y colaborar con las autoridades debe ser correspondido con un esfuerzo claro y perceptible por parte de éstas para responder y canalizar la voluntad comunitaria de mejoramiento de la calidad de vida de la vecindad y por ende su seguridad..

V. SITUACION INSTITUCIONAL Y POLITICAS DE LA ADMINISTRACION

A. La administración

Frente a la situación presentada anteriormente, tanto de criminalidad registrada como percibida por las encuestas, es necesario entender cuales son las herramientas y mecanismos con los que cuenta la administración distrital para responder a estos desafíos, así como las políticas que ha propuesto la alcaldía Mockus-Bromberg.

El alcalde es, por normas legales y constitucionales, la primera autoridad de policía del municipio. Consecuencia directa de lo anterior, es un agente directo del presidente de la república en materia de orden público y responsable del mismo ante la comunidad.

El alcalde Mockus organizó un equipo para apoyarlo en estas materias, dentro de lo que se destaca el nombramiento de un consejero para la seguridad. Adicionalmente, reestructuró la Secretaría de Gobierno, creando dos subsecretarías, una de las cuales está exclusivamente dedicada a atender los asuntos de convivencia ciudadana.

La principal herramienta con la que cuenta el Alcalde para manejar los problemas de criminalidad es la Policía. Sin embargo, aun cuando él es el jefe de la policía en el distrito, en Colombia, desde los años 50 la policía dejó de ser municipal para convertirse en un cuerpo armado de naturaleza civil, del orden nacional. Por lo tanto, los comandantes de la Metropolitana no son seleccionados por el Alcalde, quien tampoco está en capacidad para decidir el pie de fuerza policial de la ciudad. Esta situación, resultado de la violencia partidista, le resta un margen de maniobra significativo a las autoridades civiles en el manejo de este problema.

La política de seguridad de la actual administración se encuentra consignada en el Plan Integral de Seguridad. Los objetivos primordiales de la política eran tres:

Primero lograr reducir, mediante la autorregulación ciudadana y el fomento de una cultura ciudadana, los niveles de violencia, agresividad e intolerancia buscando un mayor respeto entre los ciudadanos y la de éstos hacia la ciudad, construyendo una imagen colectiva de ciudad. Para esta administración la falta de cultura ciudadana, junto con la violencia intrafamiliar y la pobreza de la comunicación en la familia y en la escuela, eran factores determinantes de la inseguridad. Segundo, disminuir el número de homicidios y de otros delitos, en particular el atraco callejero, el asalto bancario, el atraco a residencias y el hurto de vehículos. Por tratarse, respectivamente, del crimen más grave y de los delitos más comunes, los que más deterioran la calidad de vida cotidiana de los ciudadanos. Tercero, mejorar los esquemas de resolución pacífica de conflictos con el fin de dotar a los capitalinos con herramientas para dirimir disputas sin recurrir a la violencia.

Para lograr estos objetivos, la administración definió las siguientes acciones

1. El fortalecimiento de la policía metropolitana, el cual consistió no sólo en incrementar el número de policías dedicados a la vigilancia de las calles y a labores administrativas, sino en capacitarlos con el fin de lograr una mayor confianza del ciudadano hacia el agente de policía. La inversión en el fortalecimiento de la Policía Metropolitana pasó de \$2,325 millones de pesos en 1994 a 29,796 millones en 1997. Al analizar los proyectos prioritarios atendidos con estos recursos se destaca ante todo el apoyo al parque automotor (compra de vehículos, mantenimiento, combustibles y seguros) con el 33.1% del total de recursos para este año. Le siguen en importancia el pago del Centro Automático de Despacho (CAD), con 31.8%, comunicaciones y construcción y dotación de estaciones con 13.4% cada uno. Mientras que los CAI y la profesionalización del recurso humano recibieron cada uno alrededor del 2.4%. Gracias a estos proyectos y al incremento general de los recursos, la policía ha podido mejorar sus esquemas de respuesta a los llamados de la población, así como su capacidad de reacción frente a delitos como el atraco bancario. Cabe anotar, sin embargo, que esta intensificación del patrullaje motorizado es muy conveniente y necesario para la labor reactiva de la policía pero que implica una disminución de los "agentes de cuadra" capaces de interrelacionarse mejor con la comunidad y de garantizar una permanencia visible en las calles de la ciudad.

2. La creación de los Frentes Locales de Seguridad. Este mecanismo buscaba acercar a los individuos de una comunidad con las autoridades de policía locales para combatir la inseguridad en las cuadras, manzanas y barrios. Actualmente se han creado 1,865 Frentes de Seguridad. Además de la creación de esos frentes se vio la necesidad de complementarlos con la adecuación de las estaciones de policía como escuelas de seguridad ciudadana donde los individuos acuden para conocer la institución, el Código de Policía, etc. Hasta el momento se han capacitado 3,109 líderes

comunitarios. Este tipo de acciones han tenido éxito particularmente en los barrios populares y de clase media en Bogotá, donde se ha encontrado una mayor receptividad y disposición por parte de la ciudadanía para integrarse y coadyuvar al esfuerzo de las autoridades en pro de la seguridad.

3. La restricción al horario de los establecimientos nocturnos y campañas de desestímulo al consumo de alcohol. Siguiendo un análisis epidemiológico, se constató que el mayor número de incidentes violentos ocurren los fines de semana, en las horas de la noche, y que la mayor parte de las víctimas y de los agresores (cuando se conocen) presentaban tasas de alcoholemia positiva. Estas medidas, han tenido sin duda alguna un gran impacto y, asociadas a la veda al porte de armas, han contribuido de manera determinante a la disminución de los homicidios en la capital.

4. El plan Desarme. En este sentido la Alcaldía Mayor propuso al gobierno Nacional suspender la vigencia de todos los permisos del porte de armas expedidos a particulares, por termino indefinido. Sin embargo, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministro de Defensa, se negaron a aceptar esta petición. Entonces, durante todo el año 1996 se realizaron campañas, conferencias, seminarios con el fin de concientizar a las personas sobre el uso indebido de las armas y de la entrega voluntaria de las mismas. El resultado de la campaña fue la entrega 1,868 armas de fuego, 9,979 cartuchos (munición). Estas campañas para disminuir el porte de armas han tenido un éxito, asociadas, como ya se vio en el párrafo anterior, al control al expendio de licores.

5. El desarrollo de un programa contra la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. En este campo, se realizaron jornadas de vacunación contra la violencia que buscaban crear conciencia en torno al maltrato infantil y de la mujer, la conducta violenta de los ciudadanos, incrementar el número de denuncias, etc. En estas campañas participaron 39,150 personas de Bogotá. Lo anterior hace parte de la estrategia de cultura

ciudadana de la alcaldía, con el objetivo de reducir la agresividad en los hogares, pero igualmente, para sensibilizar al conjunto de hogares sobre la importancia de intervenir y proteger a los menores objeto de violencia. Como se señaló anteriormente, el efecto a mediano y largo plazo de este tipo de conductas sobre la violencia ha sido demostrado en otros países.

6. El programa de resolución pacífica de conflictos y justicia cercana al ciudadano. En esta línea se buscó fortalecer las 104 Inspecciones de Policía con el fin de lograr una mayor eficiencia en el servicio que prestan, mejorar 6 Comisarías de Familia ya existentes y la creación de ocho nuevas comisarías. Estas instituciones se encargarían de tratar problemas sobre violencia intrafamiliar, maltrato infantil e incumplimiento de obligaciones por parte de algún miembro de la familia. Además, se propuso crear cinco Centros de Conciliación o Casas de Justicia en distintas localidades de la ciudad. La función principal de este tipo de centro es la de contribuir a la búsqueda de soluciones para dos partes en conflicto. Este último aspecto no ha podido desarrollarse a cabalidad, en buena parte debido a las diferencias existentes con autoridades del nivel nacional, cuyo concurso es esencial para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Hasta ahora sólo funciona la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, la cual ha enfrentado dificultades, pues no es clara su filosofía y se mezclan aspectos puramente conciliatorios y preventivos con represivos (la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía funcionó allí en los inicios de la Casa).

Esta serie de iniciativas de la Alcaldía se han visto reflejadas en la modificación de algunos comportamientos de la ciudadanía. Sin embargo, una evaluación detallada de cada uno de ellos está aún por hacerse. A pesar de esto, es necesario subrayar que este tipo de acciones tienen sus principales efectos en el mediano plazo, razón por la cual se requiere, primero que sean mantenidos con igual vigor en el tiempo, y segundo que sean evaluados periódicamente para garantizar que, después del anuncio, el acatamiento a las normas de convivencia se mantenga.

B. La Policía Nacional

La Policía Nacional es el principal cuerpo de vigilancia de la capital. Si bien es cierto que el Ejército (a través de la Brigada 13) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) participan de este esfuerzo, sus objetivos son diferentes de la vigilancia y protección del ciudadano común frente a la criminalidad cotidiana.

La ciudad cuenta hoy en día con 12,500 policías para cubrir las necesidades de casi 6 millones de habitantes. Esto nos daría una cifra de un policía por cada 480 habitantes, o sea 2 policías por 1,000 habitantes. Obviamente se trata de una cifra insuficiente. Como punto de comparación, ciudades norteamericanas como Dallas (2.3), Kansas (2.4), Los Angeles (4.09) y Chicago (4.1) cuentan con una tasa superior aun cuando enfrentan niveles de criminalidad inferiores.

El número de policías que efectivamente está patrullando las calles en un momento cualquiera es muy inferior. David Bayley, en un estudio realizado sobre 28 cuerpos de policía en 5 países (Canadá, Gran Bretaña, Japón, Australia y Estados Unidos), estimó que "por cada 100 policías empleados, no más de 12 están desplegados en las calles en un momento dado". Este resultado impactante resulta de restar al pie de fuerza total los miembros de la institución que están prestando labores administrativas, los que están en misiones especiales, los que están enfermos o de vacaciones y dividiendo ese nuevo total por el número de turnos (tres al día)².

Para el caso de la Policía Metropolitana, los resultados de este cálculo son menores. En efecto, si se descuenta el personal adscrito que se encuentra prestando funciones de vigilancia en edificios públicos y a protección a dignatarios (aproximadamente

² Bayley David (1994) "Police for the Future" en la Serie "Studies in crime and public policy". Oxford University Press, Nueva York. pags 52, 53.

2,600), los que trabajan en la parte administrativa (300) y 10% que se encuentra en vacaciones o en cursos de formación, se llega a la conclusión de que Bogotá tiene para la vigilancia de sus ciudadanos en la calle 8,350 policías. Si se dividen estos efectivos en tres turnos, se concluye que, en un momento cualquiera del tiempo, hay cerca de 2,800 miembros de la institución en las calles de Bogotá. Esto significa el 22% contra el 12% para otras ciudades del mundo. Aún así, el resultado significa que tan solo hay 0.46 policías disponibles por cada 1,000 habitantes.

Debe reconocerse que la Policía Nacional ha venido adelantando una serie de medidas para incrementar el pie de fuerza disponible. Dos ejemplos ilustran este propósito. Por un lado, el incremento de los policías bachilleres, los cuales apoyan a la comunidad en múltiples asuntos, con lo cual brindan uno de los servicios que espera el ciudadano de su policía, a saber orientación, información, tránsito, y mediación en algunos conflictos menores. El otro elemento de respuesta a la insuficiencia de personal, radica en crecimiento de la capacidad de las escuelas de formación. Tal es el caso de la nueva escuela de Facatativá.

El problema del pie de fuerza no es exclusivo de la capital. Si bien es cierto que existen regiones del país con una tasa mayor de policías por 1,000 habitantes, la falta de personal suficiente en el país es una constante. Baste decir que hoy en día, subsisten alrededor de cien cabeceras municipales sin ningún servicio de policía, debido tanto a la falta de personal como a la decisión de la guerrilla de convertir en objetivos militares los puestos de policial lo cual ha redundado en la necesidad de incrementar los efectivos de cada puesto para garantizar una capacidad suficiente de reacción, y por consiguiente las necesidades de personal se han acrecentado.

La Policía Metropolitana ha realizado un esfuerzo significativo para ampliar el número de centros de recepción de denuncias y mejorar los tiempos de respuesta al llamado de los ciudadanos. Así de tres centros se pasó a veinte. Igualmente se inició un proceso

de desconcentración de la institución, con la creación de tres departamentos de policía dentro de Bogotá (Bacatá, Tisquesusa y Tequendama). Esto constituye un paso importante para mejorar el control de la institución sobre sus mismos hombres, garantizando un mejor nivel de dirección y orientación de las operaciones. Igualmente esto debe abrir un camino para mejorar el sistema de rendición de cuentas de la institución frente a la comunidad y a las autoridades civiles de la ciudad.

Los logros de la policía en materia de reducción de homicidios son loables y deben proseguirse. En cuanto a los atracos callejeros, es posible que efectivamente una buena parte del crecimiento se deba al mejoramiento de los índices de denuncia. Sin embargo, su nivel no deja de ser preocupante. No puede dejar de plantearse el interrogante sobre si el esquema de más patrullas motorizadas y de acción-respuesta a las llamadas al 112 es efectivo en contra de la delincuencia callejera.

La disminución, hasta 1996, del número de atracos bancarios y a residencias es seguramente el resultado de mezcla de una labor paciente de inteligencia y de reacción rápida. El incremento de estos delitos en el primer semestre de este año impone una revisión de los modus operandi de la policía y lleva a pensar que la sola fuerza pública no puede hacer frente a este tipo de conductas. Las entidades financieras deben mejorar sus estándares de seguridad. Parece increíble que con las actuales cifras de atracos, prácticamente ninguna entidad bancaria haya instalado vidrios de seguridad para separar a los cajeros del público, así como puertas de seguridad que impidan el acceso de más de una persona a la vez en el establecimiento. En cuanto a los asaltos a las residencias, sólo sistemas de solidaridad y de buen vecinazgo pueden disminuir el número de delitos y mejorar la capacidad de respuesta de la policía.

VI. ELEMENTOS PARA UNA POLITICA DE SEGURIDAD HACIA EL FUTURO.

Los grandes paradigmas respecto de la seguridad ciudadana han venido cambiando de manera progresiva en los últimos años. Más que de una revolución conceptual, se trata de una recomposición de prioridades, a lo cual se adiciona un rejuvenecimiento de los conceptos básicos.

Dentro de las nuevas concepciones, se destaca la llamada "policía de comunidad". Esta línea de política centra sus recomendaciones en el carácter fundamental, para la reducción de la criminalidad, de la relación entre la policía y la comunidad. Si los ciudadanos perciben de manera negativa a sus fuerzas de policía, será imposible para éstas protegerlas. La calidad de este vínculo parte obviamente, de la confiabilidad y la rectitud de los miembros de la institución policial. Sin embargo, tener una policía honesta no es suficiente. Se requiere establecer una relación de comprensión, de empatía entre las partes para que la "policía de comunidad" sea una realidad. Lo anterior se logra trabajando en cuatro direcciones.

Consulta

Es fundamental que las prioridades y las estrategias anti-crimen de la policía puedan ser expuestas ante la comunidad y discutidas, modificadas y corregidas como resultado de un proceso de interacción. A través de este procedimiento, la policía comprende y asume como propias las preocupaciones de la sociedad, y ésta entiende la labor de la policía, con sus riesgos y sus limitaciones. Adicionalmente, estos encuentros permiten sensibilizar a las personas sobre el tipo de ayudas que puede brindar a la autoridad, sin jamás suplantarla. Este elemento es fundamental pues no se trata de privatizar la labor de las autoridades ni de crear grupos armados que asuman la función policial ni judicial.

De otra parte, estas reuniones de consulta se convierten en un proceso de retroalimentación por excelencia para la policía, ya que no complementan la visión que

ella pueda tener sobre la criminalidad y sobre los resultados de su accionar con la percepción de la misma comunidad a la cual sirve. Finalmente, los procesos de consulta, cuando son regulares y asumidos con compromiso real por las partes, permiten que los prejuicios existentes de parte y parte se corrijan de manera progresiva gracias a una humanización e individualización de la institución y de las comunidades. Así, se descubren mutuamente, para encontrar que ser joven no es sinónimo de potencial delincuente, y que la mayor parte de los policías cumplen lealmente su función. Este aspecto de las reuniones de consulta abre el espacio para que problemas concretos de mala conducta, de indolencia o de ineficiencia sean tratados directamente entre los ciudadanos afectados y los comandantes de las unidades involucradas.

Desconcentración

Como se ha visto en el diagnóstico, los problemas de seguridad de Bogotá varían de manera importante en intensidad y en tipología, de localidad en localidad y, podría decirse de barrio en barrio. Por lo tanto, es esencial darle capacidad a las autoridades para que adapten sus políticas y estrategias a esos problemas específicos en cada lugar. Para ello se requiere que los comandantes de las unidades más cercanas a la sociedad tengan una autonomía y un margen de decisión cada vez mayores para poder adaptarse a las situaciones que enfrentan. En el caso de Bogotá, un paso importante se ha dado con la creación de los tres departamentos en los cuales se ha dividido la ciudad. Sin embargo, esto debe ir más allá. Un comandante de estación (la unidad que cubre una localidad) puede fácilmente tener más de 600.000 personas bajo su cuidado. Esto es más que el comandante de la mayor parte de los municipios colombianos e incluso que algunos departamentos. Los Centros de Atención Inmediata (CAI) pueden convertirse en esa unidad básica de policía, con incidencia a nivel de barrios, gracias a la cual la respuesta de la autoridad puede ser más rápida, eficaz, y acorde a los problemas que se enfrentan específicamente en esa comunidad. Para ello deben transformarse en mini-estaciones de policía, dotadas de personal suficiente y dirigidas

por un oficial que pueda asumir realmente la responsabilidad de lo que sucede en su jurisdicción.

Movilización social

La comunidad es la base de la seguridad. Obviamente, no se trata, insisto nuevamente, de que se transforme en policía. Se trata de que la ciudadanía se ayude mutuamente. La palabra clave es solidaridad. Los sistemas de vigilancia de barrio no consisten, como creen algunos, en armar a los ciudadanos para que se defiendan. Se trata de apoyar a vecinos para evitar ser una víctima aislada de los criminales. Los frentes de seguridad local creados recientemente en Bogotá constituyen una buena aplicación del concepto. Sin embargo, una vez más, se debe profundizar y ampliar dicha práctica. Las asociaciones de comerciantes, los taxistas, son agrupaciones que pueden contribuir enormemente a la seguridad de la ciudad simplemente reportando hechos delictivos en curso o asumiendo normas comunes de seguridad pasiva, como alarmas o sistemas de intercomunicación. En este sentido, por ejemplo, los establecimientos bancarios bogotanos están en mora de crear un programa de seguridad que permita, ante todo, proteger la vida de sus empleados, y además reducir el riesgo de un atraco. En este caso, como en muchos otros, proteger debidamente sus propios intereses es ser solidario con el resto de la ciudad. En efecto, medidas de tal naturaleza liberarían personal de la policía hoy concentrado en proteger dichos establecimientos. Lo anterior sin mencionar la disminución del riesgo inherente a los enfrentamientos entre criminales y policía, en las calles de la ciudad.

Otro elemento de seguridad pasiva de los ciudadanos radica en el proceso de tatuaje de los bienes personales. Para los vehículos esto es una práctica cada vez más común pero podría extenderse a electrodomésticos, y otros enseres de valor. Este tipo de iniciativas requiere de campañas de sensibilización contra la compra de objetos robados.

Por último, pero no menos importante, este proceso de movilización de la sociedad debe, como la caridad, empezar por casa. Muchas entidades públicas consideran que ellos no tienen responsabilidad alguna en materia de seguridad. Sin embargo, un alumbrado público deficiente, unos teléfonos públicos inexistentes o inservibles, se convierten en factores que facilitan las agresiones y dificultan la reacción de los ciudadanos y de las autoridades.

En otro campo, aún más importante, los servicios de protección al menor, las comisarías de familia, las secretarías de salud, educación y recreación, cumplen una labor esencial y parte de sus resultados se reflejan en las condiciones de seguridad generales de la población. Estas funciones no son accesorias a la seguridad. Por el contrario, tienen un mérito e importancia propios. Pero si las tasas de violencia y criminalidad se convierten en uno de los elementos para fijar prioridades de acción de estos servicios sociales, su impacto será mayor.

Un último elemento de la movilización de la sociedad tiene que ver con la atención a las víctimas del crimen y a los testigos. Parte fundamental de los deberes del ciudadano es el de denunciar los hechos delictivos de los cuales es víctima o testigo. Sin embargo asumir esta responsabilidad no es fácil, consume tiempo y muchas veces puede generar riesgos. No puede olvidarse que en Bogotá, según la encuesta del DANE, un siete por ciento de la población adujo temor a las represalias como causa de no denuncia de un delito.

Las autoridades deben concentrarse en facilitar la colaboración con la justicia de los ciudadanos. Esto incluye ampliar el número de centros de recepción de las denuncias, entrenar el personal para que asista y ayude a las víctimas que requieren atención y apoyo para superar el miedo, el trauma y la frustración que produce el ser objeto de una agresión de cualquier naturaleza. Esto es particularmente necesario para las

mujeres y los niños agredidos físicamente. En este sentido es por ejemplo necesario que Medicina Legal descentralice los servicios de reconocimientos y exámenes físicos requeridos para constatar lesiones físicas o agresiones sexuales.

Solución de problemas

Dentro de esta filosofía de acción, la policía y las autoridades deben enfocar sus esfuerzos no sólo a intervenir para prevenir, disuadir o sancionar actos antisociales. Deben también, con las comunidades analizar los problemas de inseguridad para resolverlos, caso por caso. Esto significa que la respuesta a un problema de delincuencia no debe limitarse a ejercer mayor control o incrementar las patrullas en la zona afectada. Debe realizarse un análisis de la situación y ofrecer una respuesta integral. Muchos problemas de pequeña delincuencia se pueden resolver de manera más eficiente atacando sus causas reales y no simplemente su manifestación. No se trata de que la policía resuelva problemas estructurales de la sociedad, como la pobreza o el desempleo, pero sí de aportar soluciones que van más allá del epifenómeno criminal. Muchas veces este tipo de acciones pueden ser tan simples como controlar mejor los bares y centros nocturnos para evitar que se instalen en zonas residenciales.

Desde otro enfoque, el cual ha sido exitoso en ciudades como Nueva York, se hace énfasis en los pequeños problemas de convivencia y en la atención prestada a lo que en Colombia se denominan las contravenciones menores. Esta teoría, conocida como "la ventana rota" subraya la importancia de evitar que expresiones como los grafitos, la acumulación de basuras o el deterioro de inmuebles perduren en el tiempo. Estos hechos, generan una sensación de desidia, de falta de interés y de permisividad para delitos más graves. El deterioro del entorno urbano es una señal que invita a la pequeña delincuencia a apropiarse de las zonas e imponer su ley. Prevenirlo es una cuestión relativamente simple y que emite un mensaje claro de autoridad, de

preocupación y de presencia efectiva de las autoridades, lo cual previene y disuade a eventuales delincuentes.

Finalmente, se presentan a continuación algunas recomendaciones concretas que podrían mejorar de manera rápida y real tanto los problemas de criminalidad como la percepción de inseguridad que tienen los bogotanos.

Recomendaciones

- Pensar en un sistema mediante el cual el Distrito pueda incrementar el pie de fuerza destinado a la capital de manera a garantizar un crecimiento neto real y sostenido del número de policías con los que cuenta.
- Mejorar la capacidad de atención y de patrullaje de los CAI para que vuelvan a ser mini estaciones de policía, con personal y medios suficientes. Esto, inclusive a costa de reducir su número actual. No puede existir peor mensaje para la ciudadanía que ver un local de policía abandonado o cuyos agentes están dedicados a “cuidar el CAI “ y por lo tanto no pueden responder a las necesidades de la comunidad. Los CAI deberían igualmente convertirse en centros de recepción de denuncias de manera que esta diligencia se vuelva más simple y fácil para la víctima del ilícito.
- Atención a víctimas y testigos. La policía y otros organismos del estado, como la Fiscalía, Medicina Legal o las Comisarías de Familia deben formar personal especializado en atender y apoyar a las víctimas que se acercan a denunciar un delito. Debe humanizarse la seguridad, retornando a la premisa básica que más importante que el hecho, es la situación de la persona.
- Fortalecer y convertir en una prioridad absoluta las relaciones con la comunidad. Este elemento debe ser un de los criterios de evaluación de los comandantes y responsables de estaciones y departamentos. Actualmente, el marco general para esta política ya existe en la Policía Nacional. Debe profundizarse y fortalecerse.

- Fomentar la conformación de redes de solidaridad en los barrios, y entre los gremios para apoyarse mutuamente y colaborar con las autoridades. En particular, a nivel de los barrios, esta acción debe orientarse primordialmente a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, generando actividades que compenentren a los vecinos y eliminen el anonimato propio de las grandes ciudades.
- Motivar a los comandantes a resolver problemas más que a producir arrestos.
- Obligar a otras agencias del estado a responder por los reclamos de la ciudadanía y hacerlos más eficientes, de manera que su presencia y respuesta sean visibles y comprobables por la comunidad.

BIBLIOGRAFIA

- Bayley David, (1994). "Police for the Future", Oxford University Press. Nueva York.
- Donziger Steven ((1996). "The real war on crime". Rhe report of the National Criminal Justice Commission. National Center on -institutions and Alternatives. Nueva York.
- Policía Nacional (1995, 1996). "Revista Criminalidad". Centro de Investigaciones Criminalísticas. Bogotá.
- Varios Autores (1996). "Seguridad en Bogotá: ¿Quiéwn podrá salvarnos?". Foro económico, regional y urbano. Número 5, octubre-diciembre. Bogotá.
- Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá. (1997). "Seguridad y convivencia". abril, Bogotá.
- Cámara de Comercio (1997). "Observatorio de la seguridad ". Boletín Número 3, julio. Bogotá.
- Cámara de Comercio (1997). "Veeduría Cívica. Evaluación del Plan Formar Ciudad, 1996". junio. Bogotá.
- De Francisco Gonzalo (1997). " Seguridad ciudadana: Documento de análisis". Fundación Milenio, Bogotá.
- Varios Autores (1995). "Violencia urbana e inseguridad ciudadana. Memorias del Seminario Intternacional realizado en Santa Marta, 6 y 7 de marzo de 1994". PNUD, PNR, Bogotá.
- Rubio Mauricio (1996). "Inseguridad y Conflicto en las ciudades colombianas". Documento CEDE 96-09, CEDE, Universidad de los Andes, diciembre, Bogotá.
- Segovia Mora Guillermo (1994). "La violencia en Santafé de Bogotá". Ecoe ediciones. Bogotá.
- Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (1996-97). "Boletines 1, 12, 13,14...17". Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bogotá

Cuadro 1

Delitos en Santafé de Bogotá

	Contra el patrimonio	Tasa por 100.000 Hab.	Contra la vida e integridad	Tasa por 100.000 Hab.
1990	27457	-	13753	-
1991	40392	811.6	16167	324.8
1992	41440	811.7	17582	344.4
1993	35916	685.9	18342	350.3
1994	40915	761.7	17152	319.3
1995	45981	834.6	13496	245.0

Fuente: Desde 1990 -1996 Revista Policía Nacional

Hasta 1989 Dijn, tomado de Violencia en Santafé de Bogotá.

*Boletín de estadística No. 503: La justicia en cifras 1937-1993.

Cuadro 3

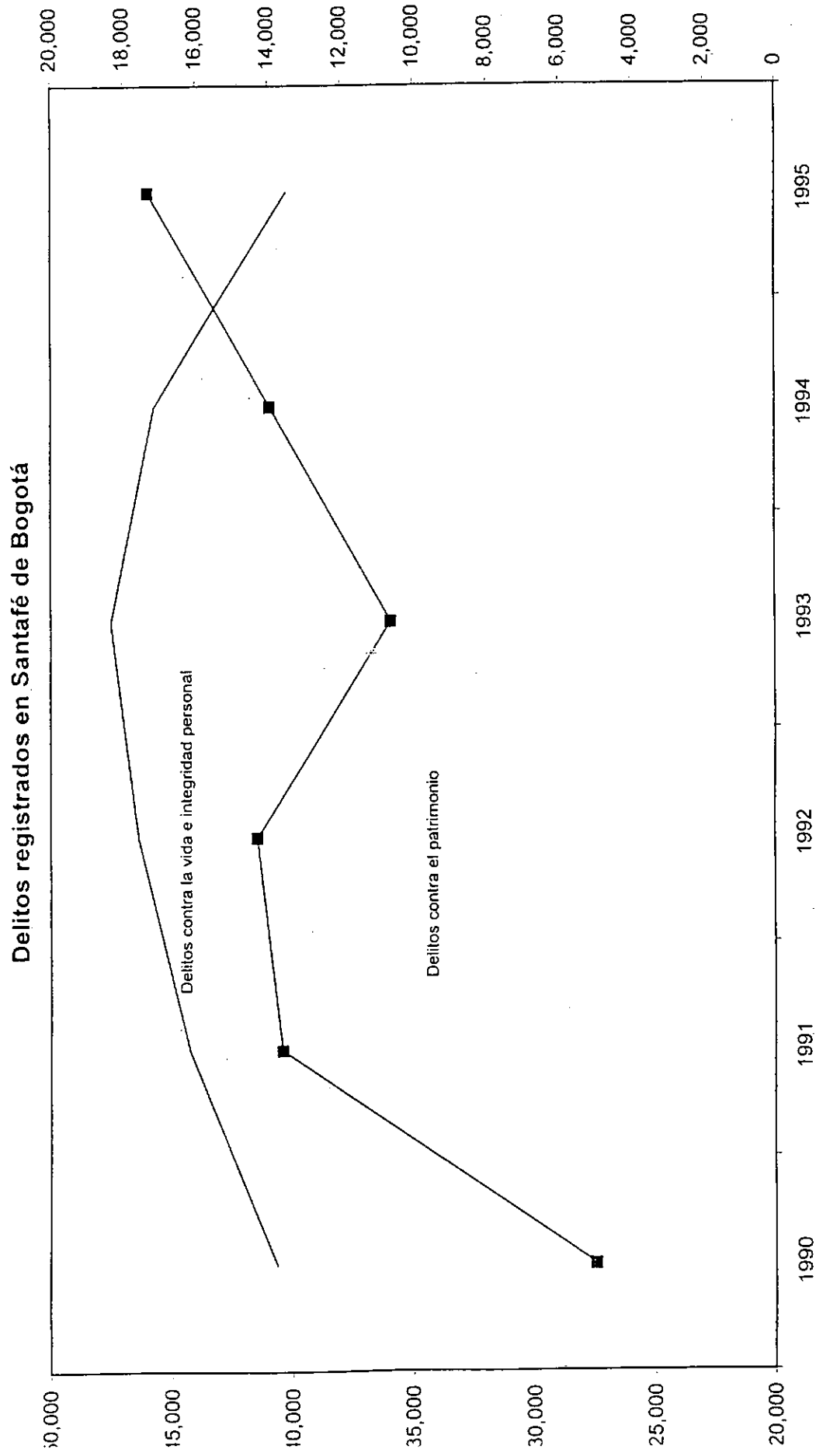
Santafé de Bogotá	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Homicidios comunes	2250	2890	3352	4352	3885	3657	3531
Tasa por 100.000 hab.	-	58.0	65.6	83.1	72.3	66.3	61.2
Según causa de muerte							
Arma de fuego	1643	2110	2448	3192	2824	2700	2589
Arma cortopunzante	495	636	770	987	869	772	743
Otras causas	113	145	134	173	192	185	199

Fuente: Revista de la Policía Nacional 1995, 1996

Cuadro 4

	1,991	%	1,995	%
Problemas de vecindad en Santafé de Bogotá				
Total hogares	1,211,981		1,335,189	
Hogares afectados	130,610		218,533	
% hogares afectados	11		16	
Total delitos cometidos	143,580		240,447	
Hogares que informan problemas en los barrios por clase de problema				
Total problemas informados	2,026,599		3,273,923	
Delincuencia	455,117	22.5	743,030	22.7
Accidentes de tránsito	45,646	2.3	246,367	7.5
Conflictos entre vecinos	78,649	3.9	155,655	4.8
Violaciones *	-	-	65,588	2.0
Presencia de pandillas	278,664	13.8	629,010	19.2
Expendio consumo de drogas	162,654	8.0	416,749	12.7
Maltrato en los hogares	12,616	0.6	114,626	3.5
Contaminación	-	-	366,228	11.2
Ningún problema	297,010	14.7	195,160	6.0
Otro problema	637,674	31.5	278,607	8.5
No sabe, no informa	58,569	2.9	62,903	1.9
Hogares que informan en los barrios por medidas tomadas para solucionarlos				
Total respuestas	1,386,797		1,746,426	
Acudir a las autoridades	270,448	19.5	366,318	21.0
Organizar el vecindario	170,141	12.3	181,761	10.4
Contratar vigilancia privada	49,417	3.6	150,848	8.6
Colaborar con la policía	118,984	8.6	247,928	14.2
Adquirir armas	4,464	0.3	17,995	1.0
Cambiar de residencia	5,363	0.4	41,351	2.4
Otro	767,980	55.4	740,225	42.4
Autoridades + colaborar con la policía	389,432	28.1	614,246	35.2
Autoridades a las que acudirían las personas en caso de verse afectadas por hechos violentos				
Total respuestas	1,724,048		1,555,308	
Inspección policía	462,142	26.8	193,063	12.4
Unidad policía	-	-	474,312	30.5
CAI	978,225	56.7	626,139	40.3
F2-DAS	59,551	3.5	48,680	3.1
Juzgados	101,527	5.9	11,294	0.7
otro	47,338	2.7	79,157	5.1
Fiscalía	-	-	47,522	3.1
Ninguno	75,265	4.4	75,141	4.8
Fuente: Boletín de estadística, Criminalidad real. Dane, marzo 1995 No. 504 y datos proporcionados por Mauricio Rubio				

Gráfico 1

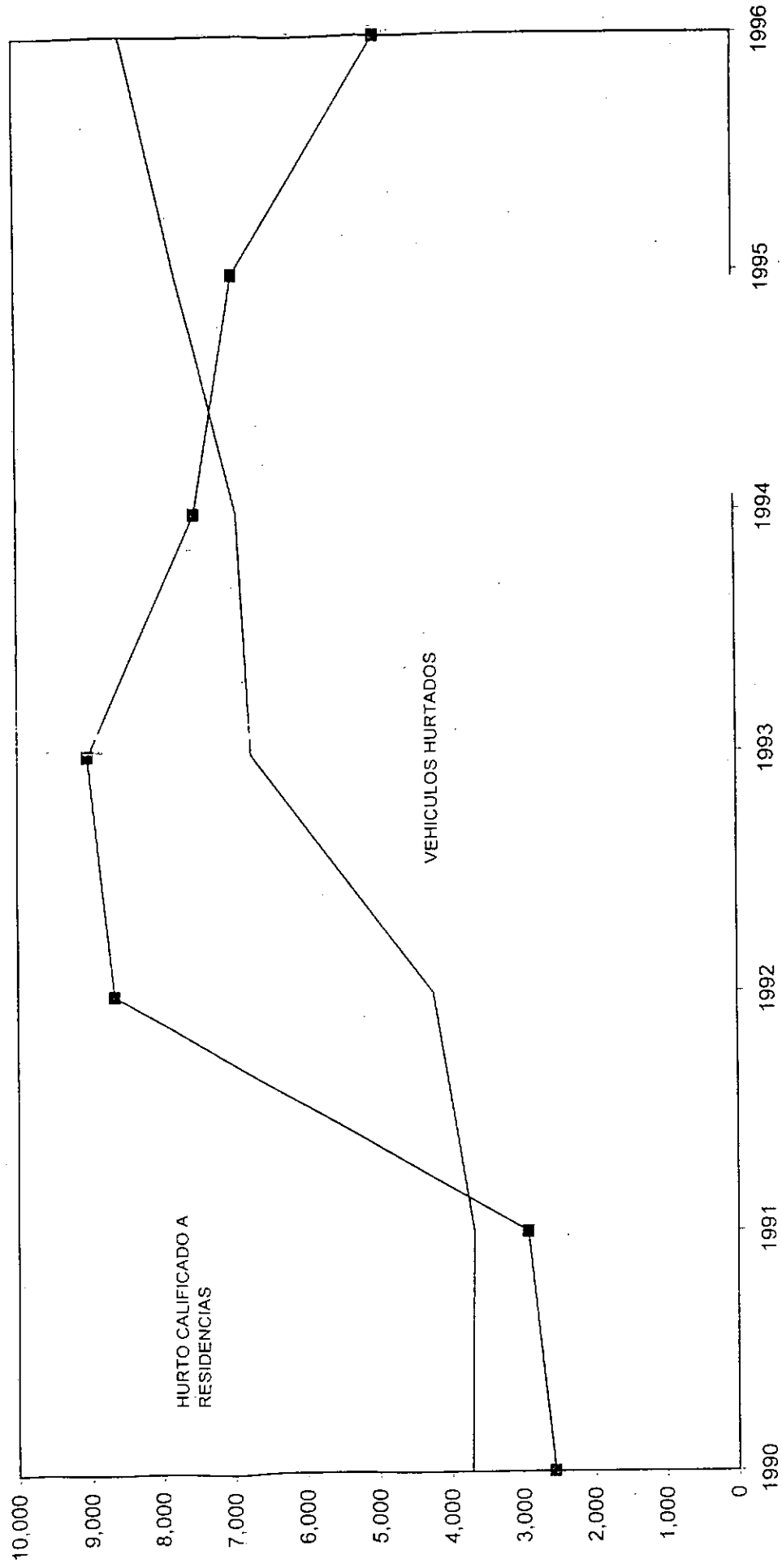


Cuadro 5

	1991	%	1995	%
Actitudes asumidas por las víctimas frente al delito.				
Total	143,580		249,757	
Denunciaron	43,241	30.1	75,739	30.3
Respondieron por cuenta propia	10,774	7.5	15,533	6.2
Otra actitud	822	0.6	627	0.3
Ninguna actitud	85,969	59.9	147,952	59.2
Arreglaron	-		906	0.4
Otra respuesta	2,774	1.9	9,000	3.6
Delitos denunciados, y por autoridad ante la cual se presentó la denuncia				
Total delitos denunciados	47,252		75,739	
Inspección policía	13,804	29.2	19,780	26.1
Unidad Policía	10,693	22.6	28,340	37.4
CAI	11,744	24.9	7,742	10.2
F2-DAS	4,082	8.6	4,048	5.3
Unidad fiscal	-		6,182	8.2
Juzgados	4,704	10.0	1,759	2.3
Dijin-Sijin	-		865	1.1
Defens. proc.com.flia. ICBF	862	1.8	1,924	2.5
Otros	1,363	2.9	3,297	4.4
No sabe	-		1,802	2.4
Razones aducidas para no denunciar				
Total razones	85,969		164,078	
Falta de pruebas	26,726	31.1	58,732	35.8
Inoperancia de la justicia	11,041	12.8	45,375	27.7
Trámites complicados	6,721	7.8	16,188	9.9
Temor a represalias	11,401	13.3	10,927	6.7
Ausencia de autoridad	6,745	7.8	10,930	6.7
Otra razón	23,335	27.1	22,556	13.7
Fuente: Boletín de estadística, Criminalidad real. Dane, marzo 1995 No. 504 y datos proporcionados por Mauricio Rubio				

Gráfico 2

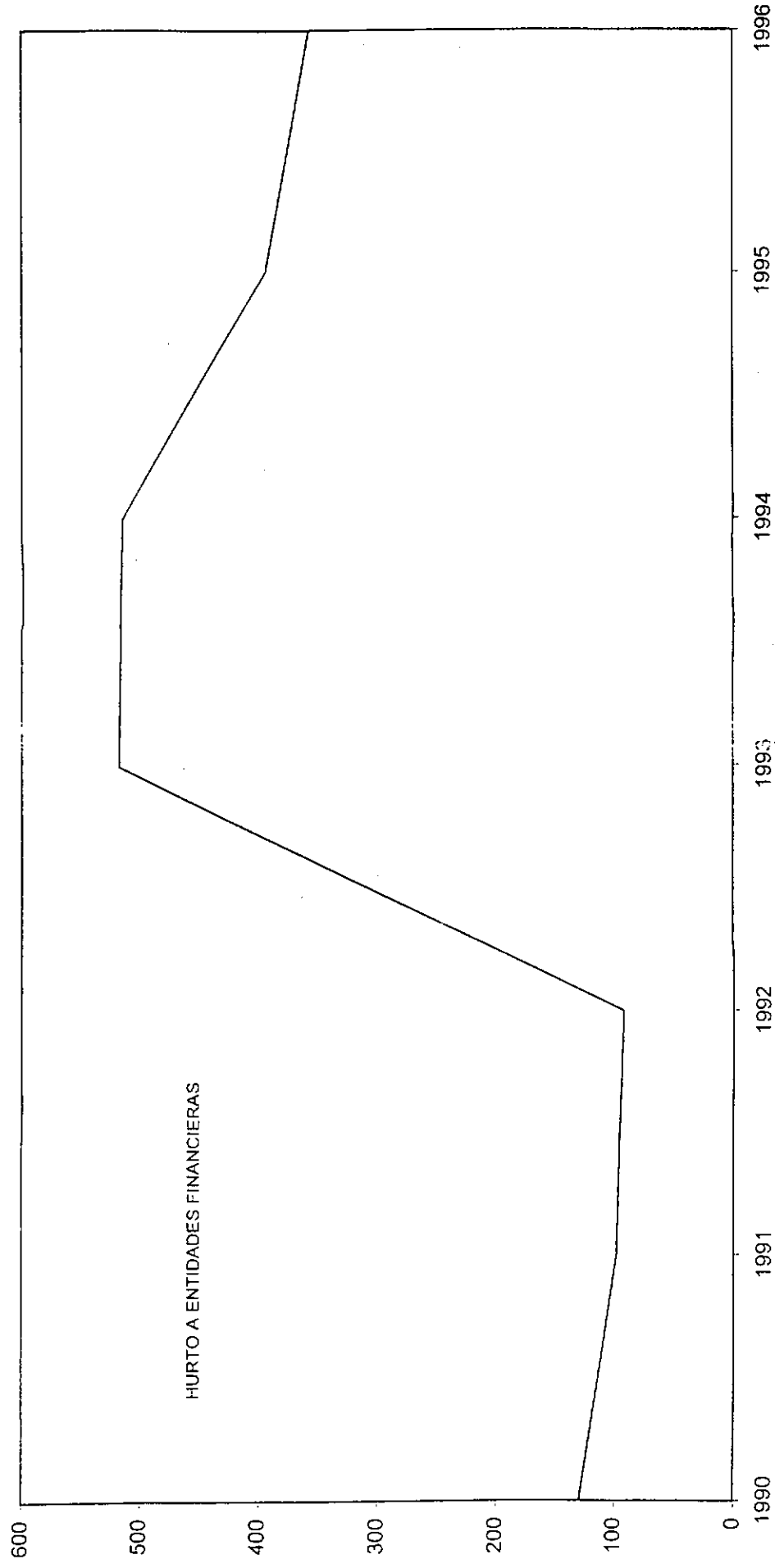
Delitos registrados en Santafé de Bogotá



Fuente: Revista de la Policía Nacional 1995, 1996

Gráfico 3

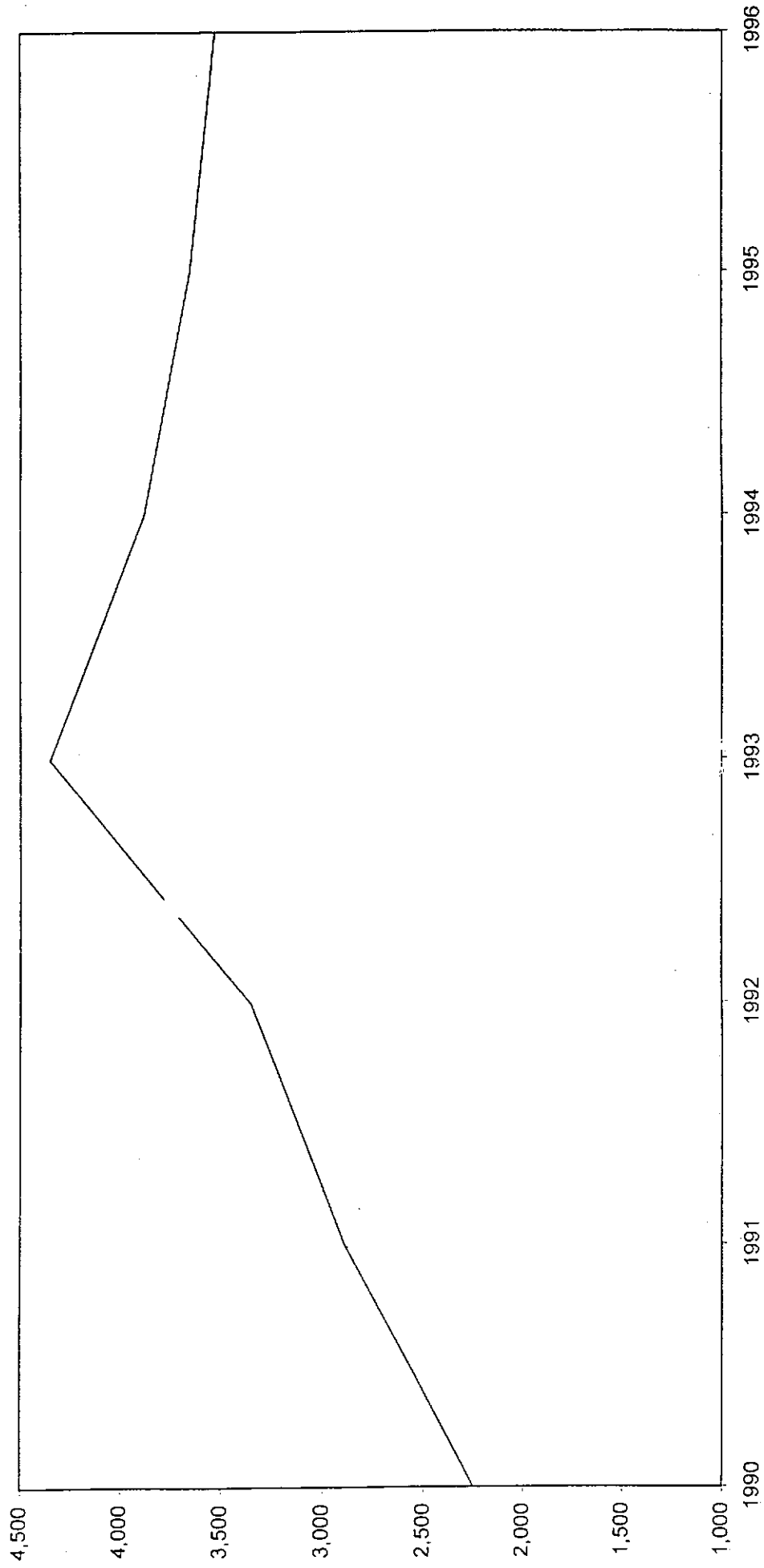
Delitos registrados en Santafé de Bogotá



Fuente: Revista de la Policía Nacional 1995, 1996

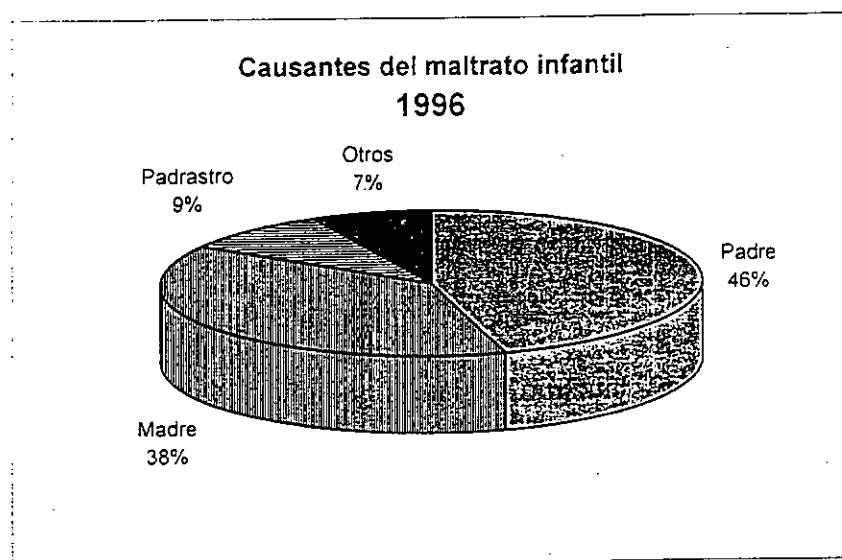
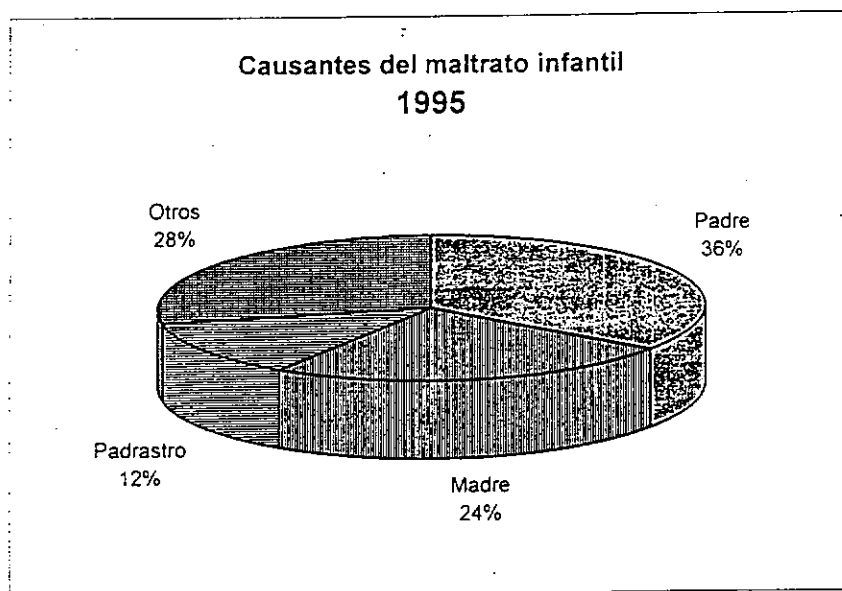
Gráfico 4

Número de homicidios comunes en Santafé de Bogotá



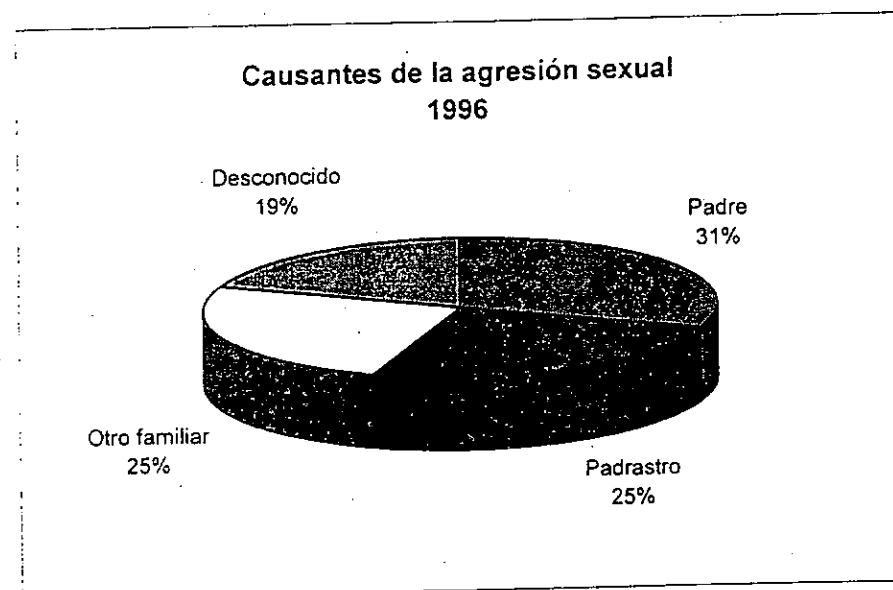
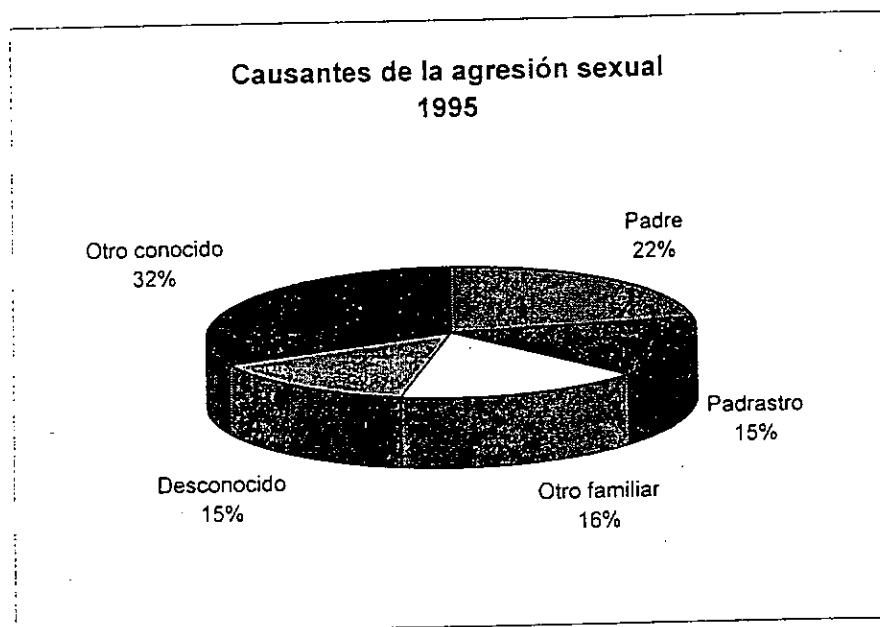
Fuente: Revista de la Policía Nacional 1995, 1996

Gráfico 5



Fuente: Instituto de Medicina Legal.

Gráfico 6



Fuente: Instituto de Medicina Legal.

Gráfico 7

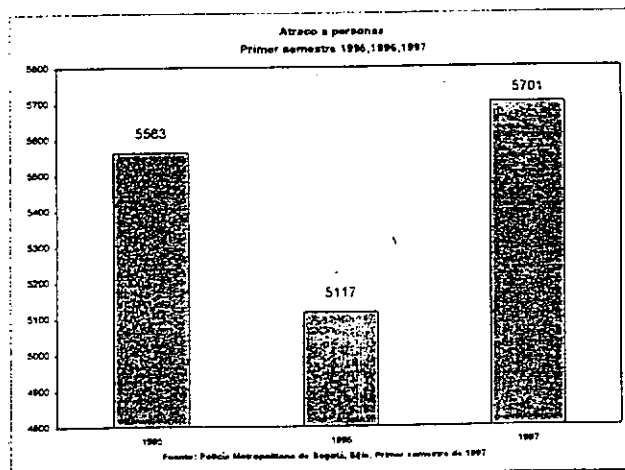
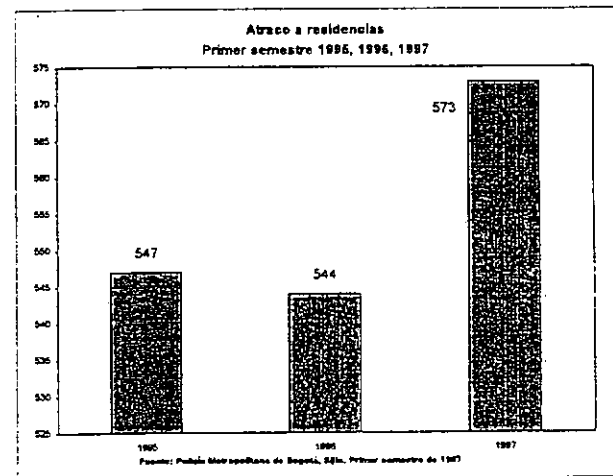
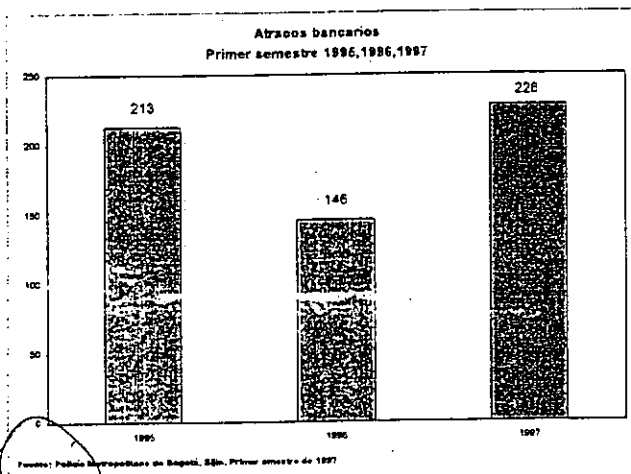
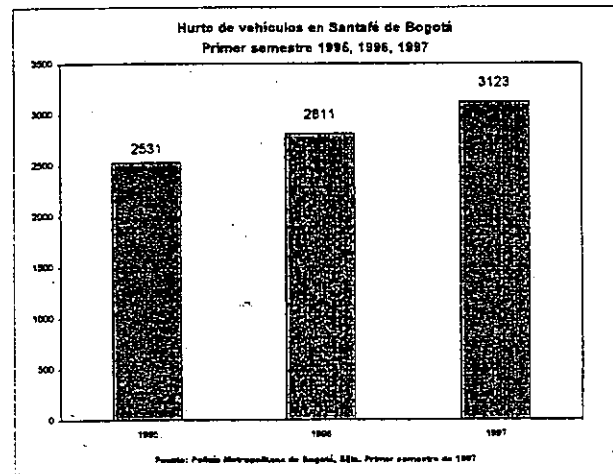
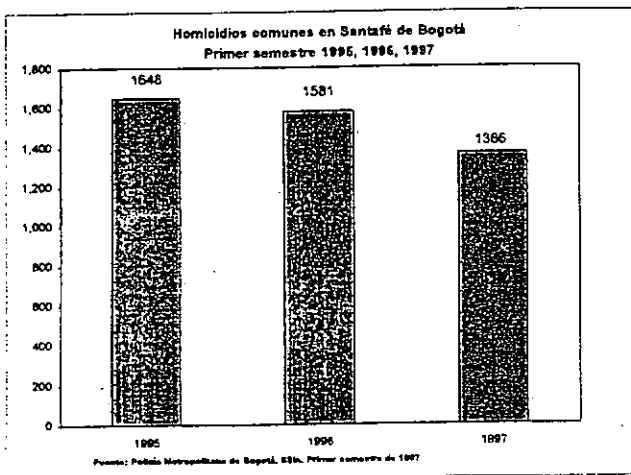
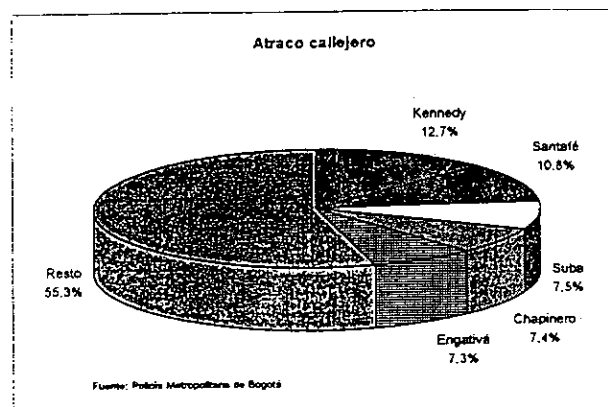
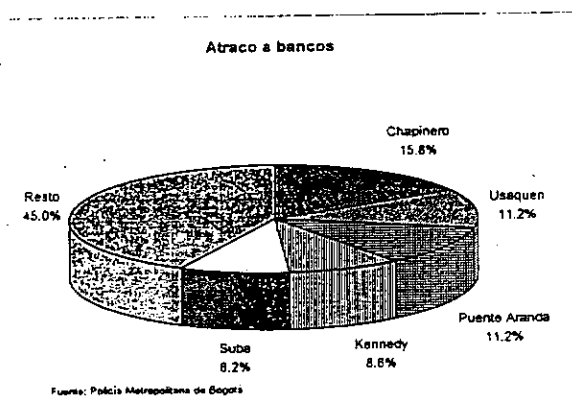
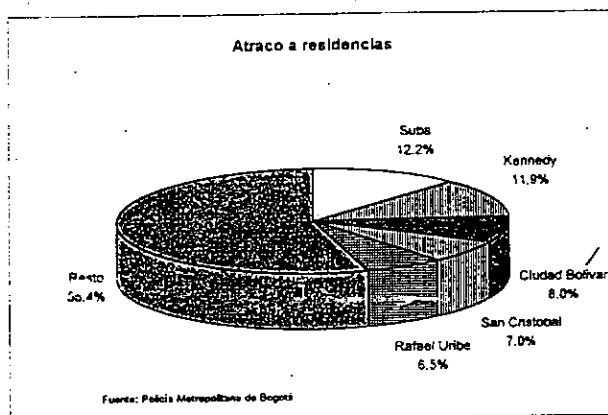
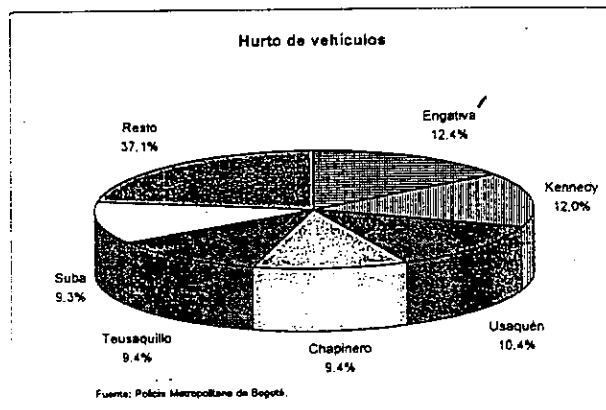
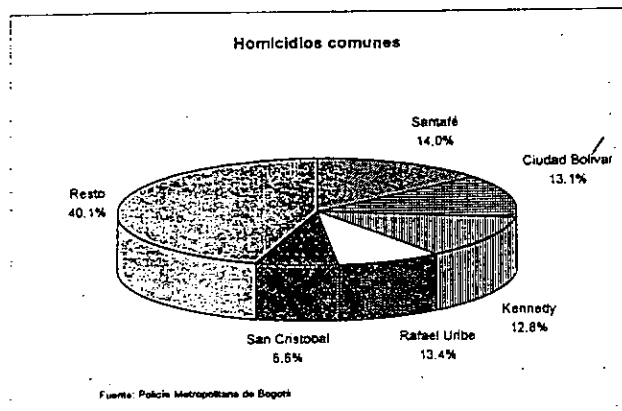
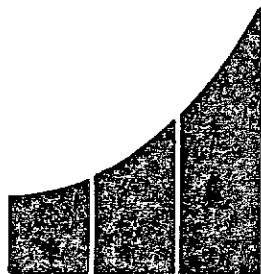


Gráfico 8





FEDESARROLLO

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO

FEDESARROLLO es una entidad colombiana, sin ánimo de lucro dedicada a promover el adelanto científico y cultural y la educación superior, orientándolos hacia el desarrollo económico y social del país.

Para el cumplimiento de sus objetivos, adelantará directamente o con la colaboración de universidades y centros académicos, proyectos de investigación sobre problemas de interés nacional.

Entre los temas de investigación que han sido considerados de alta prioridad están la planeación económica y social, el diseño de una política industrial para Colombia, las implicaciones del crecimiento demográfico, el proceso de integración latinoamericana, el desarrollo urbano y la formulación de una política petrolera para el país.

FEDESARROLLO se propone además crear una conciencia dentro de la comunidad acerca de la necesidad de apoyar a las Universidades colombianas con el fin de elevar su nivel académico y permitirles desempeñar el papel que les corresponde en la modernización de nuestra sociedad.